



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)

| | |
|-------------|------------------------------|
| REFERENCIA: | PROCESO ORDINARIO LABORAL |
| ASUNTO: | APELACIÓN DE SENTENCIA |
| DEMANDANTE: | JUAN FERNANDO MORENO GIRALDO |
| DEMANDADO: | VIVA 1A IPS S.A |
| RADICADO: | 050013105 001 2013 01320 01 |
| ACTA No | 58 |

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada en el proceso promovido por **JUAN FERNANDO MORENO GIRALDO** en contra de **VIVA 1A IPS S.A** frente a la sentencia proferida por la Juez Primera Laboral del Circuito de Medellín.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 58** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA¹

El señor JUAN FERNANDO MORENO GIRALDO instauró demanda en contra de VIVA 1 A IPS S.A con la que pretende se declare que laboró en virtud de un contrato de trabajo desde el mes de abril de 2009 y diciembre de 2012 y que la empresa ha incumplido con la obligación de cancelar el valor de las prestaciones sociales. En consecuencia, se condene al reconocimiento y pago de las cesantías, los intereses sobre las cesantías, vacaciones, primas de servicio, aportes a la seguridad social, indemnización moratoria y las costas del proceso.

¹ De folios 2 a 5, **páginas 3 a 6** del PDF denominado "Expediente.1" del expediente digital. Data del 29 de octubre de 2013.

Para sostener sus pretensiones afirmó que comenzó a laborar para la demandada en su sede Medellín desde abril de 2009 hasta diciembre de 2012, desempeñándose como Médico Internista y con una asignación salarial de \$6.500.000 mensuales; el servicio lo prestó en las instalaciones de la IPS donde disponía de un consultorio para la atención de los pacientes programados por la IPS, haciendo turnos semanales utilizando personal y elementos de la propiedad de la demandada para cumplir con su función. No le fueron canceladas las prestaciones sociales, cesantías y sus intereses, vacaciones y primas de servicio y no fue afiliado a la seguridad social.

1.2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA²

La demandada señaló los hechos como no ciertos y se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que entre las partes no existió contrato de trabajo, sino uno de carácter civil de prestación de servicios. Las fechas señaladas en la demanda corresponden a las del vínculo civil suscrito con vigencia del 1 de agosto de 2008 a diciembre de 2012. La prestación del servicio fue de manera temporal o esporádica. Acepta no haber pagado ningún concepto laboral por cuanto entre las partes no hubo una relación de tal naturaleza.

Propuso como excepciones de mérito las que denominó, prescripción, inexistencia de las obligaciones, pago, improcedencia del principio de la realidad sobre las formas, Buena fe y cobro de lo no debido.

2. LA SENTENCIA

En la sentencia proferida el **15 de octubre de 2015** tomó las siguientes determinaciones:

i) DECLARÓ que entre **JUAN FERNANDO MORENO GIRALDO** y **VIVA 1 IPS S.A.** existió un contrato un CONTRATO DE TRABAJO entre el **1 de agosto de 2008** y el **31 de diciembre de 2012**, sin solución de continuidad. **ii) CONDENÓ** al reconocimiento de cesantías, intereses sobre las cesantías, primas de servicio, vacaciones. ABSOLVIÓ de la pretensión de Aportes a la seguridad social. **iii) CONDENÓ** a la sanción moratoria del artículo 65 del CST a razón de \$58.399 diarios a partir del 1 de enero de 2013, día siguiente a la terminación del vínculo hasta el pago de las prestaciones adeudadas. **iv) CONDENÓ** en costas a la parte demandada

3. EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR VIVA 1 IPS S.A.

² De folios 161 a 169, **páginas 145 a 153** del PDF denominado “Expediente.1” del expediente digital.

Los argumentos del apoderado de la parte demandada cuestiona las condenas del siguiente modo: **i)** Cuestiona el **numeral primero**, referido a la declaración de la existencia de la relación de trabajo, razonando de este modo: **a)** Hace énfasis en que dentro de la organización no existía médico internista de planta, el actor nunca fue objeto de llamados de atención ni requerimientos, no participó en reuniones por las cuales se llegará a incluir que estuviera subordinado o atado a circunstancias que únicamente se dan en la relación laboral. El médico era autónomo, los testigos declaran que él mismo impartía las actividades o programas médicos teniendo en cuenta la patología que presentara el paciente y a que en la Clínica esa circunstancia se daba por un número de horas determinado. **b)** Agrega que el demandante nunca presentó una reclamación de inconformidad frente a la forma en la que desarrollaba su actividad o labor, y que para ambas partes en su momento existió fue un **contrato civil de prestación de servicios**, con unas actividades puntuales que se estaban especificando. **c)** Dice que la entrega de unos elementos o que se realizaran actividades en las instalaciones de la organización, no significa *per sé* que existió una subordinación, e insiste en que quedó demostrado que el señor Moreno no estaba subordinado, cuando estaba frente al paciente realizaba la función sin que tuviera indicaciones puntuales **ii)** Y apela el **numeral segundo** en su integridad, insistiendo en que los derechos no fueron reclamados en su momento e insistiendo en que ambas partes entendían que la relación se rigió por un verdadero contrato civil de prestación de servicios. **iii)** Cuestiona la condena en costas invocando la buena fe de la empresa sin que se evidencie mala fe, reiterando que se trató de un contrato civil, se declararon los valores en razón a las retenciones en la fuente y el contratista siempre lo entendió de esa manera, sin que hubiese efectuado reclamación alguna

4. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia³, las partes intervinieron oportunamente:

La **IPS VIVA 1 A S.A** insiste en la revocatoria de la sentencia de primera instancia en sus numerales 1º, 2º y 5º, y que en lugar se profiera decisión absolutoria, reiterando los argumentos del recurso: **i)** Invoca los artículos 22, 23 del CST Y EL ARTÍCULO 53 de la CP, y transcribe apartes de las

³ Artículo 15 del Decreto 806 de 2020. Auto del 4 de agosto de 2020 denominado "001-2013-01320 admite recurso".

sentencia C-665 de 1998, C-386 de 2000, T 255 – 2004, T 063 de 2006 y de la Sala de Casación Laboral, de las sentencias SL-52142018 (62233), Nov. 28/18 y SL 2171 de 2019, para señalar que de la *prueba documental* no se puede inferir que efectivamente demuestre la existencia de una subordinación, y lo que realmente prueba, es el cumplimiento de las obligaciones del contratista derivadas del contrato por prestación de servicios al pasar las cuentas de cobro indicando el valor por las horas y días laborados, que no coinciden con las cuentas que fueron pasadas mensualmente, siendo unas por más horas y otras por menos, lo que da cuenta que no existía un horario fijo en el que el médico desempeñase su labor. **ii)** Aduce que la existencia de una dependencia tampoco puede inferirse de la **diligencia de interrogatorio de parte**, señalando que el doctor JUAN FERNANDO MORENO GIRALDO indicó que como médico internista, acordaba el horario con el coordinador de VIVA 1 A IPS, incluso, era libre de indicar que días se iba y regresaba de vacaciones en el mes de diciembre y en la temporada de semana santa, en la que además indicó, que durante este periodo no se daban citas por mutuo acuerdo entre él y el coordinador, y que esta **confesión** se corrobora con lo dicho por el testigo Rodrigo Restrepo, coordinador administrativo de la demandada, quien sostuvo que el demandante era quien indicaba su disponibilidad y con base en ello, la IPS procedía a programar las citas según su agenda. Y aduce que en el interrogatorio de parte el demandante reconoció el contrato celebrado entre las partes como un contrato de prestación de servicios, tal y como se desprende de las respuestas de las preguntas 1, 2, 3 y 5. Y que también reconoció que presentaba cuentas de cobro de acuerdo con las respuestas de las preguntas 3 y 4, lo que en su criterio se debe tener como una confesión. **iii)** Añade que los testigos solo indicaron situaciones o condiciones del ejercicio de su labor en calidad de médicos generales quienes se encontraban bajo un contrato de trabajo, pero nada se dijo por ellos de las condiciones de modo, tiempo, cantidad de la labor que desempeñaba el Doctor MORENO GIRALDO, señalando que al respecto suponían o indicaban que no conocían; resaltando que el doctor JORGE BAYTER dijo que el demandante no asistía a las reuniones a las que él asistía como médico general. **iv)** Insiste en que tampoco se puede predicar una relación de trabajo por el hecho de que los servicios fueron prestados en las instalaciones de VIVA 1 A IPS y que los implementos con los que realizaba las consultas fueran suministrados por dicha institución, señalando que de acuerdo a lo probado ello era de conformidad con la normativa para la atención de consultas, “tal como ha indicado la corte que en estos casos contractuales se debe tener en cuenta los arreglos de la Ley y el sistema general de seguridad social”. **v)** Concluye así que el A quo debió analizar mejor y de manera reposada las pruebas allegadas según las particularidades del caso, y no dar por sentado que por el hecho de haberse establecido la prestación de servicio en las instalaciones de

VIVA 1 A, haberla realizado ciertos días a la semanas y el recibir una contraprestación por ello, existía un verdadero contrato de trabajo, basado en las suposiciones de los testigos, desconociendo que el profesional de la salud era autónomo en la ejecución del servicio y que en ningún momento se logró demostrar que efectivamente hubiere existido una real subordinación.

A su turno el apoderado del **DEMANDANTE** solicita la **confirmación del fallo impugnado**, planteando, en síntesis: **i)** Quedó plenamente acreditado con la abundante prueba documental y testimonial, que el demandante laboró para la demandada entre agosto 1º de 2008 y diciembre 31 de 2012 como Médico especialista en Medicina Interna. Y era la demandada quien tenía la obligación de desvirtuar la presunción consagrada en el artículo 24 del CST. **ii)** Dentro de la demandada como IPS del servicio de Salud, la prestación del servicio de salud en Medicina Interna está dentro de su objeto social y necesidades, acreditándose en el proceso los elementos constitutivos del contrato de trabajo, estipulados en el artículo 23 del CST. **iii)** Invoca las sentencias de la Sala de Casación Laboral SL13020 de 2017 y SL 2555 de 2015 en relación con la indemnización o sanción moratoria.

Pues bien, la competencia de la Sala está dada por las materias del recurso de apelación interpuesto por **IPS VIVA 1 A S.A** y por ello se abordará el estudio del caso en el siguiente orden lógico: **i)** En primer lugar, se analizarán las normas que regulan el CONTRATO DE TRABAJO, el alcance de la presunción legal consagrada en el **artículo 24 del CST y S.S.** a la luz del PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE REALIDAD SOBRE LAS FORMAS PROCESALES, y el precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en relación con casos semejantes, para verificar en el CASO CONCRETO si debe CONFIRMARSE la decisión adoptada referida a que la relación contractual entre estuvo regida por un contrato de trabajo; o si, por el contrario, se trata de un vínculo naturaleza civil como insiste el apelante. **ii)** Si se confirma el numeral primero, se analizará la decisión de condenar a prestaciones sociales, vacaciones e indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del CST bajo el argumento de que el actor jamás reclamó porque para las partes el contrato celebrado era de naturaleza civil. **iii)** Finalmente, se revisará lo referido a la **condena en costas**.

5. EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS QUE SUSTENTA LA DOCTRINA DEL CONTRATO REALIDAD

De acuerdo con lo previsto en los **arts. 22 y 23 del CST**, contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona,

natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y servicios por los cuales se paga al trabajador una remuneración.

Así, para que exista un contrato de trabajo se requiere que concurren tres elementos esenciales: **i)** La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, ateniendo a que se trata de un contrato celebrado en razón a la persona *-intuitu personae-*; **ii)** La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este a exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, con la consecuente obligación del trabajador de acatar estas directrices; y **iii)** Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres elementos de que trata **el artículo 23**, se entiende que existe contrato de trabajo y **no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen**.

Además, no puede perderse de vista que en el **art. 24 del CST** modificado por el **art. 2 de la Ley 50 de 1990**, se dispone expresamente que *"Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo"*, de manera que una vez demostrada la **prestación personal del servicio** se activa la presunción de que esta se ejecutó bajo los parámetros de un contrato de trabajo, lo que obliga a quien se opone a la declaratoria de ello y de sus consecuencias, a derribarla probando que tal relación estuvo exenta de subordinación jurídica, como se ha precisado reiteradamente por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la **SL16528-2016, SL 2608-2019, SL4444-2019 y SL2736-2020**. En la identificada con **radicado 39600 del 24 abr. 2012**, sobre este aspecto, se puntualizó:

«...De lo anterior se extrae que, probada la prestación personal del servicio, la subordinación se presume.

Por ende, muy poco le sirve al demandado, para exonerarse de las obligaciones propias del contrato de trabajo, **la aceptación de la prestación del servicio de manera continua con la sola negativa de la existencia del contrato de trabajo, o la sola afirmación de que se trató de un contrato de distinta naturaleza.**

Si el demandado acepta la prestación del servicio, pero excepciona que lo fue mediante un contrato civil, como sucedió en el sub lite, **le allana el camino al demandante para ubicarse en el supuesto de hecho contenido en el artículo 24 del CST y ampararse en la presunción de que se trató de un contrato laboral**. En cuyo evento, el demandado tiene a su cargo desvirtuar la presunción mediante pruebas que demuestren, con certeza, el hecho contrario del elemento de la subordinación, es decir que la prestación personal del servicio se dio de manera independiente" (negrilla intencional)

Y en la **SL 1639 de 2022** expresó:

Ese pilar se ha desarrollado en tanto **no es atendible que la entrega libre y voluntaria, de energía física o intelectual que hace una persona a otra, bajo continuada subordinación, pueda negársele tal carácter, y por ello es que se ha entendido en amparo del propio artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que toda prestación personal de servicio remunerada se presume regida por un contrato de trabajo, disposición que asigna un paliativo probatorio al trabajador, a quien le basta demostrar la ejecución personal para que opere en su favor la existencia del vínculo laboral**, mientras que el empleador deberá desvirtuar el hecho presumido a partir de elementos de convicción que avalen que el servicio se ejecutó bajo una relación jurídica autónoma e independiente (**CSJ SL1664-2021**). (negrilla intencional)

Así las cosas, para desvirtuar la presunción de existencia del contrato de trabajo, no hay que estarse a las denominaciones que una o ambas partes le den al vínculo, o atenerse al rótulo que aparece en los documentos que se crean a partir de esa relación, sino en la naturaleza misma de la relación y la forma como se ejecutaron las prestaciones, para hallar lo esencial del contrato.

Desde esa perspectiva, cuando se someta a juicio el **principio de la realidad sobre las formas** con el fin de establecer la existencia del contrato de trabajo, le corresponde al juez, en cada caso, sin desconocer los principios tuitivos del derecho laboral, analizar las particularidades fácticas propias del litigio a fin de establecer o desechar, según el caso, los elementos configurativos de la subordinación.

Ahora, sobre el segundo elemento constitutivo del contrato de trabajo, a saber, **la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador**, cabe resaltar que, según la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral, este es el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios⁴. En este sentido, la subordinación se ha definido:

[...] como un poder de sujeción jurídica y material entre dos personas y que en el ámbito de una relación laboral se concreta en «la aptitud o facultad del empleador de dar órdenes o instrucciones al trabajador y de vigilar su cumplimiento en cualquier momento, durante la ejecución del contrato de trabajo y la obligación permanente del asalariado de obedecerlas y acatarlas cumplidamente» (CSJ SL, 1 jul. 1994, rad. 6258).⁵

Resalta la Corte que el trabajo y sus dinámicas de ejecución se han transformado a lo largo de los años, por lo que en ocasiones el elemento de subordinación no coincide con el concepto tradicional y abstracto “en el que el empleado ofrece su trabajo

⁴ SL 1439 de 2021, que cita SL 2885 de 2019.

⁵ **SL 3345 de 2021**.

directo a una fábrica"⁶. Por esto, en los casos dudosos o ambiguos en los que la subordinación no se presenta de forma clara, la Corte ha recurrido a la **Recomendación 198 de la OIT**⁷, que da indicios para analizar la relación fáctica laboral y así determinar si entre las partes existió una relación laboral encubierta.

Al respecto, en Sentencia **SL 1439 de 2021** se hizo una recopilación de los indicios que han sido tratados por la jurisprudencia:

La Sala Laboral ha identificado algunos *indicios* relacionados en la Recomendación n.º 198 de la OIT que, sin olvidar su carácter relativo o circunstancial, no exhaustivo y dinámico, pueden ser útiles para descifrar una relación de trabajo subordinada. De esta forma, ha considerado como tales la prestación del servicio según el **control y supervisión de otra persona** (CSJ SL4479-2020); la **exclusividad** (CSJ SL460-2021); la **disponibilidad** del trabajador (CSJ SL2585-2019); la concesión de **vacaciones** (CSJ SL6621-2017); la aplicación de **sanciones disciplinarias** (CSJ SL2555-2015); **cierta continuidad del trabajo** (CSJ SL981-2019); el cumplimiento de una **jornada u horario de trabajo** (CSJ SL981-2019); **realización del trabajo en los locales o lugares definidos por el del beneficiario** del servicio (CSJ SL4344-2020); el suministro de **herramientas y materiales** (CSJ SL981-2019); el hecho de que exista **un solo beneficiario** de los servicios (CSJ SL4479-2020); el desempeño de **un cargo en la estructura empresarial** (SL, 24 ag. 2010, rad. 34393); la **terminación libre del contrato** (CSJ SL6621-2017) y la **integración del trabajador en la organización** de la empresa (CSJ SL4479-2020 y CSJ SL5042-2020).

Resalto de la Sala

Y más adelante en la misma sentencia estimó:

El trabajador que no tiene un negocio propio, una organización empresarial suya con su propia estructura, medios de producción, especialización y recursos, sino que se ensambla en la de otro, **carece de autonomía**. No se trata de una persona que desarrolla libremente y entrega un trabajo *para* un negocio, sino que **su fuerza de trabajo hace parte del engranaje de un negocio conformado por otro**.

Sobre el particular, la doctrina autorizada ha señalado que el criterio en cita tiene la peculiaridad de englobar una tríada de conceptos: integración, organización y empresa. De modo tal que este indicio se traduce «*en la inserción o disponibilidad del prestador de servicios dentro del ámbito de dirección y organización del beneficiario, esto es, en la esfera de la empresa a su cargo*», premisa de la que se deriva suficientemente «*el carácter dependiente o subordinado de la prestación de servicios*»⁸.

Resalto de la Sala

Desarrollando esta idea, para la Alta Corporación es claro que un factor indicativo de la subordinación es **que la persona preste un servicio fundamental dentro de la empresa**, integrándose como trabajador en la organización. Al respecto:

⁶ SL 3345 de 2021.

⁷ Como en sentencias CSJ SL2885-2019, CSJ SL4479-2020, CSJ SL5042-2020 y CSJ SL1439-2021, citadas en SL 3345 de 2021.

⁸ VILLASMIL PRIETO, Humberto y CARBALLO MENA, Cesar Augusto. Recomendación 198 OIT sobre la relación de trabajo. 2da ed. Bogotá: Universidad Libre, 2021, p. 129

Ese factor indicativo del contrato de trabajo, en el plano de la realidad, ha sido aplicado por esta corporación en anteriores oportunidades (CSJ SL2885-2019), además de que ha sido consagrado en la Recomendación 198 de la OIT, que sirve para informar la orientación de la Corte y que señala como parámetro determinante de una relación de trabajo el hecho de que se cumplan labores que implican «[...] la integración del trabajador en la organización de la empresa [...]», tal y como ya lo adocrinó la Sala en la sentencia CSJ SL 4479-2020.⁹

6. CASO CONCRETO

De acuerdo con los ANTECEDENTES de esta providencia, la Juez declaró la existencia de un contrato de trabajo entre el **1 de agosto de 2008** y el **31 de diciembre de 2012**, y en consecuencia condenó al pago de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, vacaciones.

Para tomar estas determinaciones invocó los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo de Trabajo siendo el demandando a quien le corresponde desvirtuar la subordinación, sin que sea suficiente la presentación del contrato o las cuentas de cobro de conformidad con el precedente de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia. Valoró la prueba documental y testimonial recaudada para concluir que el actor prestó sus servicios a la IPS VIVA como médico internista en el Staff de Medicina interna, los insumos y herramientas para la ejecución del trabajo eran suministrados por la IPS, laboraba media jornada de trabajo sin que fuera cierto que sólo hiciera presencia los jueves y viernes. La prestación del servicio fue personal, estuvo bajo la subordinación de la IPS a cambio de una remuneración económica, lo que no impedía que atendiera pacientes en su propio consultorio u otros compromisos profesionales con otras entidades.

La tesis de VIVA 1A IPS S.A en la contestación de la demanda y en la que insiste en el recurso de apelación, así como en la alegación en esta instancia es que no se presentó el elemento de **subordinación** necesario para la configuración del contrato de trabajo. Aduce básicamente: **i)** Que dentro de la organización no existe en la planta médico internista por lo que se recurrió al actor para apoyar la parte especializada médica; **ii)** Al actor no se le llamó la atención, no participó en reuniones, la entrega de elementos y la realización de actividades en las instalaciones de la empresa no implica subordinación. **iii)** El actor era autónomo en las actividades o procedimientos médicos a seguir según la patología del paciente, pudiendo en el número de horas convenidas ejercer sus funciones, en el marco del contrato por prestación de servicios, documentos

⁹ SL 5042 de 2020.

que suscribió presentando cuentas de cobro, lo que fue admitido en el interrogatorio de parte.

Previo al análisis a realizar, resulta pertinente señalar que en este proceso no se discute que el vínculo contractual entre las partes se dio entre el 1 de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de 2012; ni que el señor MORENO prestó sus servicios como MÉDICO ESPECIALISTA a los pacientes de VIVA 1 A IPS S.A en las instalaciones de esa entidad.

Ahora bien, para el análisis en el caso concreto, se analizaron los interrogatorios de parte y testimonios rendidos en diligencia del 14 de octubre de 2015¹⁰:

El representante legal **LUIS ALONSO ALVAREZ VELÁSQUEZ** de VIVA 1A admitió que el actor fue contratado como médico internista y que prestaba sus servicios dentro de las instalaciones de VIVA 1A. Afirmó que MORENO no podía atender pacientes propios sólo atendía pacientes afiliados a NUEVA EPS que le eran remitidos. Indicó que todos los insumos y herramientas para la prestación del servicio y atención de los usuarios eran facilitados por VIVA 1A y explicó que “VIVA tiene un contrato de exclusividad con la NUEVA EPS, por tanto, tenemos prohibido atender pacientes que no sean afiliados a la nueva EPS”.

JUAN FERNANDO MORENO GIRALDO al absolver el interrogatorio, reconoció su firma en el contrato obrante en el expediente¹¹, dijo que tenía un horario estipulado con el coordinador de VIVA siempre teniendo en cuenta la demanda que requería de medicina interna la IPS, explicó que “de hecho, durante esos años, la mayoría de todos esos años yo fui el único internista que estaba ahí vinculado trabajando en las instalaciones de VIVA”. Informó que paralelamente trabajaba como médico internista en la CLINICA LAS AMÉRICAS y tenía un consultorio médico particular en la Torre Médica de las Américas, agregó que al presentar declaración de renta presentaba el certificado de retención en la fuente efectuada por la IPS. Sobre el cobro de los servicios señaló que “él presentaba al director de la entidad cuántas horas había trabajado en el mes y él miraba en el sistema, donde están las cifras que le eran asignadas, si correspondía a las horas que me habían sido asignadas y a mí me consignaban en una cuenta bancaria los honorarios por eso” y sobre los documentos de **folios 9-51** precisó: “Este formato no es hecho por mí, es un formato que yo firmaba y de hecho dice que está hecho a mano, no a

¹⁰ Acta de audiencia. Páginas 203 a 205 del PDF 01 que contiene el expediente escaneado; folios 223 a 225.

¹¹ Folios 170 a 176, que ahora en el expediente escaneado obran de páginas 154 a 160 del PDF 01.

computador y tiene una letra que no corresponde a la mía, yo como beneficiario firmaba a fin de mes y estaba de acuerdo con esas horas, esa es mi firma y mis números, que son distintos a los números de la persona que copia acá, entonces a mí me entregaban un formato y que se miraba por los dos lados: lo miraba el coordinador de la empresa y lo miraba yo, y mirábamos las horas si coincidían y como beneficiario yo firmaba y esa firma sí corresponde a la mía, entonces aquí podemos ver esas firmas, del beneficiario, yo firmando y firmando también el coordinador de la entidad, ese formato como te digo es un formato que lo hacían allá en VIVA y de hecho yo como beneficiario lo firmaba"

Declaró como testigo el médico **JORGE ALBERTO BYTER BARBOSA**, quien afirmó que prestó sus servicios a VIVA 1A mediante contrato de trabajo y conoció al doctor MORENO GIRALDO al compartir con él labores en el Staff de Medicina interna, donde la función del actor era el acompañamiento a médicos generales. Sobre las condiciones de la prestación del servicio, indicó que el lugar de prestación de servicios era en la sede de la IPS y que los elementos para la atención médica eran suministrados por la empresa; que a los médicos no se les cobraba suma alguna por la utilización de los consultorios. Sobre el uniforme, manifestó que todos los médicos contaban con la bata con distintivos de la entidad, que era suministrada por la misma institución.

Y sobre el funcionamiento del staff, detalló que su consultorio estaba al frente del consultorio del Doctor MORENO GIRALDO, ubicado estratégicamente para solicitar asesoría para ver los pacientes. Sobre ese staff de medicina interna contó que se trató de una estrategia de VIVA 1A para cubrir la demanda y dar mayor acceso a los pacientes al servicio de esa especialidad; la dinámica era que el médico general valoraba al paciente y luego consultaba el caso con el internista, quien establecía la conducta a seguir, que a su vez el internista tenía sus propios pacientes asignados según la agenda.

Narró además que había unas horas establecidas para la consulta de medicina interna que eran dispuestas por el Coordinador según una agenda, la que era concretada por personal de la institución y la coordinadora, la cual todos debían cumplir y era para la atención exclusiva de los pacientes de la IPS. Afirmó que los pacientes eran atendidos a nombre de la institución y no se trataba de pacientes de cada médico. Desconoce si el actor tenía la posibilidad de enviar un reemplazo para atender las consultas, pero indica que la agenda estaba a nombre del doctor MORENO GIRALDO y era el médico asignado a los pacientes. Y en caso de vacaciones o recesos, se debía informar cualquier cambio para coordinar la agenda.

A su turno el testigo **CESAR AUGUSTO ESCOBAR** afirmó que labora para la demandada como médico de consulta externa a través de contrato a término fijo y conoce al actor, quien laboró como parte del staff de medicina interna que se realizaba los días jueves y viernes en el horario de 1 a 6 de la tarde. Narró la misma dinámica sobre el staff expuesta por el testigo BYTER BARBOSA donde el demandante determinaba el procedimiento a seguir en los pacientes remitidos, guiándose además por una agenda coordinada por los mismos empleados de la institución. Señaló que el MORENO GIRALDO se ubicaba generalmente en el consultorio 16-17 al frente del suyo el que es propiedad de la institución. Coincidió en que los elementos para la atención de pacientes fueron suministrados por VIVA y que tenía la misma dotación que el **JUAN FERNANDO MORENO**, de quién indicó que usaba una *blusa* blanca de la Institución, que se le daba como parte de la dotación de implementos de trabajo.

Finalmente, el testigo **RODRIGO ANTONIO RESTREPO VILLA** se identificó como Jefe Administrativo de VIVA 1A y afirmó conocer al demandante cuando prestó servicios para la IPS como especialista en medicina interna. Afirmó que el actor informaba los horarios en los que podía atender en el mes para que se agendaran las citas de esa especialidad y que esperaba en su consultorio mientras el médico general le remitía pacientes. Dijo que se implementó el sistema de staff de medicina interna para darle mayor eficiencia al recurso humano, y que el actor no pagaba retribución alguna por el uso de las instalaciones de la entidad, contaban con los instrumentos exigidos por el Ministerio de Protección social suministrados por la misma IPS. Además, por directriz de NUEVA EPS los médicos usaban una bata con el logo de la empresa y ratifica que los pacientes atendidos eran los de NUEVA EPS que se agendaban a través del call center de VIVA 1A.

Sobre la forma de pago, informó que el actor pasaba las cuentas de cobro en las que se especificaban los días y horas en los que había atendido pacientes de lunes a viernes, sobre las cuales se efectuaba la retención en la fuente. Indicó que no era posible que el actor enviara un reemplazo en caso de ausencia, porque era necesario que el médico estuviese vinculado con la IPS e informó que VIVA 1A no contaba con especialistas de medicina interna. Al indagársele sobre los permisos del actor para dejar de asistir a atender pacientes, indicó que si se ausentaba debían cancelar la agenda; y más adelante explicó que la IPS se especialista en pacientes de la tercera edad con patologías base manejadas por medicina interna, por lo que se buscó el apoyo de un

médico internista que acompañara a los dos médicos generales de planta para duplicar la capacidad.

Ahora bien, en relación con la prueba documental la Sala encuentra lo siguiente:

- Documentos de VIVA 1A IPS¹² equivalentes a la Factura para persona naturales no comerciantes referidos al pago de honorarios al actor: 4 meses del año 2009; 12 meses del año 2010; 11 meses del año 2011 y 9 meses del año 2012.
- Autorizaciones de pacientes en los que aparece el doctor JUAN FERNANDO MORENO GIRALDO como especialista en Medicina Interna asignado, en el Consultorio 17 de la IPS ubicada en Guayabal ¹³.
- Documento titulado "Entrega de dotación", con el que el Coordinador Administrativo de VIVA 1 A IPS - RODRIGO RESTREPO VILLA- manifiesta que hace entrega de una bata blanca para el periodo 2010. Advierte además que en caso de pérdida o indebida utilización de la dotación, será descontada de los valores¹⁴.
- Documentos en los que el doctor solicita permiso para ausentarse del trabajo para asistir a compromisos personales¹⁵.
- Certificaciones de que el doctor MORENO presta sus servicios a VIVA 1 A desde abril de 2009¹⁶.
- Contrato de prestación de servicios entre la IPS y el señor JUAN FERNANDO MORENO GIRALDO, en el que se pactan como beneficiarios los usuarios de VIVA 1 A que le sean remitidos al contratista; se establece como lugar de prestación del servicio el de VIVA 1A IPS en Medellín. Se define un valor de \$50.000 por hora como tarifa del servicio especializado de Medicina interna y se indicaron además las obligaciones del profesional, entre las que se menciona que el horario de prestación de servicios será el escogido por el contratista, se reconoce autonomía técnica y científica en la que no hay subordinación jurídica¹⁷.

Pues bien, como se señaló anteriormente, es claro que **JUAN FERNANDO MORENO GIRALDO** entre el 1 de agosto de 2008 y diciembre de 2012 prestó sus servicios como médico internista en VIVA 1 A, así lo admitió el representante legal de la institución y fue reiterado por los testigos JORGE ALBERTO BYTER, CESAR AUGUSTO ESCOBAR y RODRIGO ANTONIO RESTREPO VILLA. Lo que además se refuerza con el contrato de prestación de

¹² Páginas 10 a 48 del expediente del PDF 01; folios 9 a 51.

¹³ Páginas 49 a 117 del expediente del PDF 01; folios 52 a 120.

¹⁴ Página 119 del PDF 01; folio 122.

¹⁵ Páginas 128 y 129 del PDF 01; folios 131 y 132.

¹⁶ Páginas 130, 131 del PDF 01; folio 133, 134.

¹⁷ Páginas 154 a 160 del PDF 01 del expediente; folios 170 a 176.

servicios obrante en el expediente¹⁸. Ahora, sobre las condiciones en las que ejecutó el servicio encontramos:

En primer lugar, lo hizo en el **lugar definido por el beneficiario del servicio**¹⁹, esto es en las instalaciones de VIVA 1 A, en un consultorio de propiedad de la institución²⁰ y **dotado por esta con todos los implementos requeridos para la atención de pacientes**²¹. Situación respaldada por los testimonios e interrogatorio del representante de la entidad. Además, el doctor MORENO usaba una bata de la institución que era parte de los implementos de trabajo, **que era entregada por la IPS**²² como una exigencia de la NUEVA EPS –según testimonio del señor RODRIGO RESTREPO-. Es decir, el doctor JUAN FERNANDO era plenamente identificable como un doctor de la institución y prestaba el servicio a nombre de ella, realizaba la labor en sus instalaciones utilizando el uniforme que le era suministrado, siendo claro entonces que no es este el caso de un contratista externo a la entidad, que atiende en un consultorio privado con sus propios instrumentos²³.

En segundo lugar, su atención estaba dirigida exclusivamente a los pacientes de la NUEVA EPS que eran atendidos por la IPS, los cuales eran remitidos por el personal de la IPS al doctor MORENO: bien fuera por la agenda programada a través del call center y la coordinación médica de la IPS, o por la remisión de los médicos generales, trabajadores de la IPS, que hacían parte del STAFF DE MEDICINA. Por esto, el doctor MORENO no podía atender sus propios pacientes en dichas instalaciones; lo que denota que había **exclusividad**²⁴ en la atención, que además, valga reiterar, debía realizarse en las instalaciones de la IPS con una agenda predeterminada.

En tercer lugar, para la Sala resulta evidente que el doctor JUAN FERNANDO estaba incorporado a la estructura organizativa de la IPS, **desempeñando un papel fundamental en el STAFF de medicina interna**²⁵, estrategia creada para cubrir la demanda de atención, mejorar el servicio y tener mayor eficiencia en el recurso humano. En concreto, se puede evidenciar la incorporación del actor en los siguientes escenarios:

- Los doctores JORGE BYTER y CESAR AUGUSTO ESCOBAR narraron que el actor apoyaba a los médicos del STAFF, **determinando el procedimiento a seguir en los**

¹⁸ Páginas 154 a 160 del PDF 01 del expediente; folios 170 a 176.

¹⁹ Criterio expuesto en la sentencia SL 3345 de 2021, que se funda además en **SL 4344 de 2020**.

²⁰ Lo que se refuerza con las múltiples autorizaciones de pacientes en las que figura el doctor JUAN FERNANDO; como se constata en el expediente: Páginas 49 a 117 del PDF 01; folios 52 a 120.

²¹ **SL 981 de 2019**.

²² Página 119 del PDF 01; folio 122.

²³ Como fue analizado en sentencia **SL 1021 de 2018**.

²⁴ **SL 460 de 2021** reiterado en la **SL 3345 de 2021**

²⁵ **SL4479-2020 y CSJ SL5042-2020**.

pacientes remitidos o consultados por ellos y que además, por aparte, **se le asignaban pacientes a través de una agenda**; narran que el consultorio del doctor MORENO se ubicaba frente al de ellos y allí remitían los pacientes y solicitaban las asesorías requeridas.

- Relata el señor RODRIGO RESTREPO que la población atendida por la IPS eran personas de avanzada edad, quienes presentan patologías de base, **que deben ser manejadas por medicina interna**; e incluso menciona que cuando MORENO se ausentaba, debían cancelar la agenda de los pacientes **porque no tenían especialista**, situación le generaba inconformidad a los pacientes que asistían con dificultades a la IPS. Además informa que la IPS no cuenta con este especialista de planta.

Sobre este aspecto, llama la atención de la Sala, que según el doctor RESTREPO, la IPS esté dedicada a la atención de población con patologías base, que deben ser manejadas por medicina interna; y que los doctores JORGE BYTER y CESAR AUGUSTO ESCOBAR reconozcan que se apoyaban en el profesional de medicina interna para la atención. Situaciones que dejan claro que el papel desempeñado por el actor, como especialista en medicina interna, era **necesario** en la institución, tanto así que ante su ausencia debían cancelar la agenda de pacientes.

Si bien en el recurso se insiste que dentro de la organización no existía médico internista de planta, este aspecto no es suficiente para desvirtuar la subordinación y por el contrario refuerza la importancia de la labor realizada por el actor siendo por ello vinculado por la IPS para la atención de sus pacientes, teniendo incluso un consultorio asignado ubicado estratégicamente para la dinámica del staff de medicina interna. Además, se afirma en el recurso que los médicos de medicina general no podían cubrir el cargo del doctor JUAN FERNANDO como especialista de medicina interna, lo que sólo da cuenta de la integración del trabajador en la empresa y lo fundamental de su actividad²⁶.

Ahora, en el recurso de apelación se señala que el médico era autónomo al impartir actividades o programas médicos según la patología del paciente pues no se le daban indicaciones, lo que en manera alguna sirve de fundamento para desvirtuar la subordinación que se presume a la luz de lo previsto en el artículo 24 del CST; pues ello

²⁶ Para ello valga remitirse a la **SL 5042 de 2020** y **SL 4479 de 2020** citadas en SL 3345 de 2021, en la que se explica ampliamente el concepto de **integración del trabajador en la empresa**.

hace referencia a la **independencia y autonomía técnica de las profesiones liberales**. Sobre el particular, en la sentencia **SL 1021 de 2018** se precisó el concepto de profesiones liberales de cara a analizar el postulado de la primacía de la realidad sobre las formas:

En efecto, si se les denominó profesiones liberales es justamente por la libertad e independencia de que gozan quienes las ejercen y en las que media la autonomía técnica, una organización profesional y una marcada autodeterminación en la forma en la que la tarea se lleva a cabo, que está estrechamente ligada con la propia responsabilidad personal de los sujetos por los actos profesionales y a las que se añade que todas ellas se someten a un código moral profesional que va a guiar su ejercicio, sin que ello implique que se presente la subordinación.

Así puede articularse la idea de profesión liberal como aquella que tiene un contenido estrictamente intelectual, para la que se precisa una titulación, reconocida por el Estado, y amparada en el artículo 26 constitucional, en la que rige la *lex artis*, entendida como un contenido ético y técnico científico que dirige la labor, la cual tiene especial trascendencia social y que está marcada por la autonomía.

Así, si bien las profesiones liberales plantean escenarios más complejos para los operadores judiciales, en tanto, se deben tener en cuenta diversas variables para diferenciar el trabajo autónomo del subordinado; lo cierto del caso es que no por tratarse de una profesión de este tipo debe inaplicarse la presunción del artículo 24 del CST, sino que es necesario un análisis más riguroso para aplicarla²⁷. En estos casos, la subordinación debe analizarse a partir del criterio de **integración** a la organización²⁸, lo cual se acaba de analizar y que permite concluir que sí hay subordinación.

En cuarto lugar, en lo referente a que el doctor JUAN FERNANDO MORENO debía **coordinar sus horarios y solicitar permiso para ausentarse y disfrutar del periodo de vacaciones** para así programar la agenda de pacientes²⁹; se trata de un aspecto claramente acreditado con la prueba testimonial de manera que si bien existía cierta discrecionalidad por el actor al momento de la elección de horarios³⁰ es claro que todo se encontraba previamente planeado y agendado a través del Coordinador. Incluso, en la documental aparecen dos solicitudes de permiso para ausentarse del trabajo que tampoco fueron cuestionadas por la demandada³¹.

²⁷ Considera la Corte que, no puede desconocerse que la Constitución económica habilita el ejercicio profesional autónomo, derivado del principio *pro liberate*, que ha sido incluso incorporado en la Ley 100 de 1993, permitiendo a los independientes procurar su derecho fundamental a la salud y otros derechos. SL 1021 de 2018.

²⁸ SL 1439 de 2021: *Por consiguiente, la subordinación en las profesiones liberales recibe una respuesta adecuada a partir del criterio de la integración en un servicio organizado, que implica la dirección, no tanto del contenido de las prestaciones, sino de las condiciones de su ejecución [...] Negrita propia.*

²⁹ SL 6621 de 2017.

³⁰ Clausula séptima del contrato de prestación de servicios. Páginas 154 a 160 del PDF 01 del expediente; folios 170 a 176.

³¹ Páginas 128 y 129 del PDF 01; folios 131 y 132.

En quinto lugar, hay prueba de la **continuidad del trabajo**³², pues en los documentos de facturación de honorarios se encuentra que el actor laboraba entre 21 y 17 días al mes entre los años 2009 y 2011, disminuyendo en el año 2012 con 11,55 días laborados al mes³³; donde además se encuentra una **intensidad horaria** importante: 422 horas en el año 2009, 1041 horas en 2010, 887 horas en 2011 y 472 en el año 2012, según las constancias allegadas.

Finalmente, afirma el recurrente que el doctor JUAN FERNANDO nunca asistió a reuniones de la empresa, ni fue objeto de requerimientos o llamados de atención, y si bien, le asiste razón al apoderado y esto se encuentra probado en el proceso con los testimonios, esta situación no es suficiente para variar el análisis realizado por la Sala, en el que se evidenciaron al menos 6 indicios de los tratados por la jurisprudencia como **manifestaciones de subordinación**³⁴, de manera que en este caso, no solo se advierte que la demandada no cumplió con la carga de desvirtuar la presunción de la existencia del contrato de trabajo consagrada en el artículo 24 del CST, sino que además, se probaron los elementos de la relación laboral consagrados en el artículo 23, con una clara prestación personal del servicio remunerada y subordinada a partir de los indicios que se han analizado. En los términos expuestos se CONFIRMARÁ la decisión de declarar la existencia de un contrato de trabajo.

De otro lado, el recurrente muestra inconformidad en relación con los conceptos incluidos en el **numeral segundo de la sentencia**, señalando que el actor nunca reclamó en su momento las primas, cesantías, intereses a las cesantías ni las vacaciones "teniendo en cuenta que para él y la organización lo que se entendía era un verdadero contrato civil de prestación de servicios, incluyendo que él se beneficiaba y declaraba renta sobre esos mismos conceptos"

³² SL 3345 de 2021, que hace referencia a la continuidad del trabajo en SL 981 de 2019.

³³ Páginas 10 a 48 del expediente del PDF 01; folios 9 a 51.

³⁴ En concreto: (i) la prestación del servicio se dio en el lugar definido por el beneficiario del servicio, (ii) en el que además se le suministraron las herramientas requeridas para la atención de pacientes y una bata institucional; (iii) el servicio prestado estaba revestido de exclusividad para los pacientes de la IPS; (iv) el actor desempeñaba un papel fundamental en la institución, como médico especialista, y por ello dictaminaba procedimiento a seguir de los pacientes, quienes además, por ser una población de avanzada edad, requerían tratamiento en medicina interna; (v) debía coordinar sus horarios, solicitar permiso para ausentarse y para disfrutar el periodo de vacaciones; (vi) y finalmente había una continuidad en el trabajo, con una intensidad horaria relevante.

Pues bien, en la sentencia se condenó en el **numeral segundo** al pago de cesantías (\$15.993.333), por intereses sobre las cesantías (\$1.583.500), primas de servicio (\$10.447.917) y vacaciones (\$6.597.917) para un total de \$34.622.666. Se trata de conceptos que constituyen derechos laborales mínimos de los trabajadores, consagrados en nuestro ordenamiento jurídico (artículos 186 a 192, 249, 306 del CST y S.S.) y fueron solicitados en la demanda³⁵. Así, la decisión adoptada es el efecto de la declaratoria de la relación de trabajo, teniendo claro incluso, que justamente la tardanza en la reclamación del derecho generó el que se hubiese declarado la prosperidad parcial de la excepción de prescripción.

En el mismo **numeral segundo** también se condenó a la sanción consagrada en el **artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo que fue modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002**, introduciendo un límite de 24 meses para los casos en que el trabajador devengue más un de salario mínimo. En efecto, en la norma se dispone que el empleador que a la terminación del contrato de trabajo no pague al trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudadas, a título de sanción le pagará una indemnización equivalente a un día del último salario diario devengado por cada día de retardo, hasta por 24 meses; y a partir del mes siguiente, deberá reconocer intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, hasta cuando se verifique el pago, siempre que su actuar no hubiere estado revestido de razones atendibles que lo eximan de tal obligación.

Sobre la interpretación de esta norma, la Sala de Casación Laboral ha señalado (CSJ SL, 6 may. 2010, rad. 36577 reiterada en **SL10632-2014 y SL1005-2021**):

“Cuando no se haya entablado demanda ante los estrados judiciales, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes al fenecimiento del contrato de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un (1) día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales, dentro de ese lapso, sino a los intereses moratorios, a partir de la terminación del contrato de trabajo, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera.

De tal suerte que la presentación oportuna (entiéndase dentro de los veinticuatro meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo) de la reclamación judicial da al trabajador el derecho a acceder a la indemnización moratoria de un día de salario por cada día de mora hasta por veinticuatro (24) meses, calculados desde la ruptura del nudo de trabajo; y, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25),

³⁵ Literal b) del acápite de pedimentos, página 4 del PDF 01, folio 3: *Como consecuencia de lo anterior, se condenará a la demandada al reconocimiento y pago de las cesantías, intereses sobre las mismas, vacaciones, primas de servicio, aportes a la seguridad social (salud y pensiones) e indemnización moratoria.*

contado desde esa misma ocasión, hace radicar en su cabeza el derecho a los intereses moratorios, en los términos precisados por el legislador.

Pero la reclamación inoportuna (fuera del término ya señalado) comporta para el trabajador la pérdida del derecho a la indemnización moratoria. Sólo le asiste el derecho a los intereses moratorios, contabilizados desde la fecha de la extinción de vínculo jurídico."

En este caso, la Juez accedió al pago de esta indemnización moratoria porque no encontró probada la buena fe, condena que el apoderado del actor solicita en esta instancia que sea confirmada, invocando la sentencia **SL 2555 de 2015**, de la que transcribe algunos apartes.

Pues bien, la Sala encuentra acertada la decisión de condenar a la imposición de la indemnización porque efectivamente no hay razón alguna que justifique la conducta de la IPS. Por el contrario, las pruebas analizadas evidencian que se dio una relación enmarcada en un **contrato de trabajo**, y no una relación contractual de índole civil. El doctor JUAN FERNANDO fue contratado para desempeñar una labor determinada como médico especialista de medicina interna que era fundamental en la estrategia de staff de medicina interna, su función no podía ser cubierta por los médicos generales que eran parte de la IPS haciendo parte de la organización de la institución. Con la modalidad de contratación elegida, se eludieron las obligaciones derivadas de una verdadera relación laboral, en detrimento de los derechos del trabajador.

La demandada no se preocupó por traer al proceso elementos que permitan llegar a una conclusión distinta para ser exonerada de esta indemnización. Básicamente aportó el contrato de prestación de servicios y registros del profesional en la base interna de la IPS como profesional independiente, documentos que por sí solos no demuestran su buena fe, porque su discurso se centró en negar la existencia de subordinación alegando que se trataba de un contrato de índole civil y para ello en la contestación de la demanda sostuvo que el señor MORENO prestó sus servicios en **varias oportunidades** y de **manera temporal**, en los casos en que la entidad consideraba que no eran suficientes los servicios del **especialista de planta**. Estas manifestaciones resultaron contrarias a lo que surgió de la realidad, pues se demostró que no fue algo temporal, perduró más de 4 años de forma consecutiva y de hecho no había especialista de planta como señala por el apoderado en su recurso, de manera que los argumentos expresados en la contestación tampoco representan el respaldo de la buena fe exculpatoria de esta sanción.

Se concluye así que la demandada no exhibió verdaderas razones, por demás atendibles, sobre la modalidad del contrato pactada, que explicara en consecuencia el no pago de prestaciones sociales a la finalización del contrato de trabajo. La IPS no reconoció los derechos laborales del demandante, pese a que como se indicó, la relación tuvo presente el elemento de la subordinación propio de una relación laboral. Y por actuar de esa manera, resulta suficiente para que proceda la sanción moratoria.

Y por ser materia del recurso de apelación, en la medida en que si se aspira a su revocatoria ello contempla una eventual disminución en el monto, si bien se confirmará la condena se hará modificando el valor por las siguientes razones:

La A quo declaró como extremo final de la relación laboral el 31 de diciembre de **2012**, además concluyó que el último salario fue de **\$1.745.000**, mensuales que corresponde a **\$58.167** diarios. Y para el año **2012** el salario mínimo era de **\$566.700**, por lo que la suma mensual devengaba por JUAN FERNANDO MORENO superaba tal valor y en ese orden de ideas.

En segundo término, se verifica que la demanda fue instaurada el **29 de octubre de 2013**, dentro de los 24 meses siguientes a la finalización del vínculo. Por esta razón, la condena quedará así:

- Por la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$41.880.240)** que corresponde a un salario diario por el lapso 1 de enero de 2013 a 1 de enero de 2015.
- **A partir del 2 de enero de 2015** y hasta la fecha del pago, la demandada deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera sobre las sumas ordenadas pagar por concepto de **CESANTÍAS y PRIMAS**.

Finalmente se **ADICIONARÁ** la providencia para ordenar la INDEXACION de las condenas proferidas por **sanción moratoria y vacaciones**, porque se trata de unas sumas que se encuentran afectadas por la devaluación de la moneda, derivada de una economía inflacionaria como la nuestra, siendo claro que ello no implica en manera alguna el incremento del valor del crédito, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo.

Tampoco puede verse como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, lo que garantiza es que éste crédito no pierda su valor real. Así, se impone proferir una condena que ponga al demandante en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 según el cual *«dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales»*. Y la forma en que aquello se garantiza en el marco de la protección especial de los derechos laborales y de la seguridad social, es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda (**SL 359 -2021**).

Así se ordenará al demandado calcular la indexación de acuerdo con la siguiente fórmula y criterios **al momento del pago de la obligación**:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} - \text{VALOR A INDEXAR} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

ÍNDICE FINAL correspondiente al IPC para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

ÍNDICE INICIAL correspondiente al IPC para vigente **a la fecha en que debió efectuarse el pago: 1 de enero de 2015 (sanción moratoria) y 1 de enero de 2013 (vacaciones)**

VALOR A INDEXAR: \$41.880.240 sanción moratoria y \$6.597.917 vacaciones.

7. COSTAS

En el recurso también se cuestionó la **condena en costas en primera instancia** señalando que no nacen a la vida jurídica porque no hay subordinación que se predica en la sentencia. Es pertinente recordar, que las costas son aquellas erogaciones económicas que comportan la atención de un proceso judicial, que deben ser asumidas por la parte que resulte vencida judicialmente, que, para este caso, lo es el extremo pasivo- **VIVA 1A IPS S.A** - . De esta forma, la condena en costas contiene una obligación procesal que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, y que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir; condena de naturaleza objetiva que, en consecuencia, será CONFIRMADA.

Pero a al salir avante parcialmente el recurso de apelación y de conformidad con el artículo 365 del CGP, no se condenará en costas en esta instancia a la demandada.

8. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

PRIMERO: CONFIRMAR, MODIFICAR y ADICIONAR la sentencia de primera instancia.

Se **MODIFICA** el numeral **SEGUNDO** en lo relacionado a la condena por sanción moratoria, la cual queda así:

- Por la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$41.880.240)** que corresponde a un salario diario por el lapso 1 de enero de 2013 a 1 de enero de 2015.
- A partir del **2 de enero de 2015** y hasta la fecha del pago, la demandada deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, sobre las sumas ordenadas pagar por concepto de CESANTÍAS y PRIMAS.

SEGUNDO: Se **ADICIONA** la sentencia, porque al momento del pago de las condenas por concepto de sanción moratoria y vacaciones, **VIVA 1A IPS S.A** reconocerá la INDEXACIÓN de esos valores de acuerdo con la siguiente fórmula y criterios

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} - \text{VALOR A INDEXAR} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

ÍNDICE FINAL correspondiente al IPC para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

ÍNDICE INICIAL correspondiente al IPC para vigente **a la fecha en que debió efectuarse el pago: 1 de enero de 2015 (sanción moratoria) y 1 de enero de 2013 (vacaciones)**

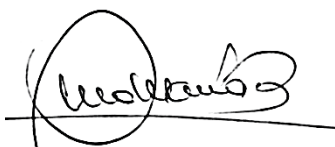
VALOR A INDEXAR: \$41.880.240 sanción moratoria y \$6.597.917 vacaciones.

TERCERO: En esta instancia no se causaron costas.

Lo anterior se notifica por EDICTO. Se firma en constancia por los que en ella intervinieron.

RADICADO 050013105 001 2013 01320 01

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



RADICADO: 050013105 – 001-2013-01320-01

SENTENCIA del //26/08/2022

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia,
para ello debe tener una cuenta de Microsoft.

Enlace en caso de no tener lector QR: <https://etbcsj->

[my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/E_n9Kz5Tuw8hKhfBDQoXgwrwBfFOB5w4Ar58vlsvRKYYPUg?e=zBtKv9](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/E_n9Kz5Tuw8hKhfBDQoXgwrwBfFOB5w4Ar58vlsvRKYYPUg?e=zBtKv9)